



Consejo de Seguridad

Distr. general
8 de octubre de 2020
Español
Original: inglés

Carta de fecha 7 de octubre de 2020 dirigida al Secretario General y a los Representantes Permanentes de los miembros del Consejo de Seguridad por la Presidencia del Consejo de Seguridad

Tengo el honor de adjuntar a la presente copia de la exposición informativa ofrecida por la Representante Especial del Secretario General para Haití y Jefa de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití, Sra. Helen Meagher La Lime, así como de las declaraciones formuladas por el Ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, Excmo. Sr. Roberto Álvarez Gil, y por los representantes de Bélgica, China, Estonia, Francia, Alemania, Indonesia, la Federación de Rusia, San Vicente y las Granadinas (en nombre de los miembros africanos del Consejo de Seguridad más uno, a saber, el Níger, Sudáfrica, Túnez y San Vicente y las Granadinas), el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, los Estados Unidos de América y Viet Nam, en relación con la videoconferencia sobre “La cuestión relativa a Haití”, convocada el lunes 5 de octubre de 2020.

De conformidad con el procedimiento establecido en la carta de fecha 7 de mayo de 2020 dirigida a los Representantes Permanentes de los miembros del Consejo de Seguridad por la Presidencia del Consejo de Seguridad (S/2020/372), acordado a raíz de las circunstancias extraordinarias relacionadas con la pandemia de enfermedad por coronavirus, la exposición informativa y las declaraciones adjuntas se publicarán como documento oficial del Consejo de Seguridad.

(Firmado) Vassily Nebenzia
Presidente del Consejo de Seguridad



Anexo I

Declaración de la Representante Especial del Secretario General para Haití y Jefa de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití, Helen Meagher La Lime

Es un honor tener la oportunidad de proporcionar al Consejo de Seguridad información actualizada sobre la situación en Haití, en vísperas del primer aniversario de la salida del país de los efectivos de mantenimiento de la paz y de la creación de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH). En sus primeros 12 meses de funcionamiento, la BINUH se ha esforzado por ejecutar su mandato, entre otras cosas, tratando de impulsar un entorno propicio para que sectores clave de la sociedad haitiana superen el estancamiento en que se encuentra actualmente el país y lo sitúen en la senda conducente a la estabilidad y el desarrollo sostenible a largo plazo.

Sin embargo, mientras nos encontramos hoy reunidos, Haití está teniendo nuevamente dificultades para no sumirse en el precipicio de la inestabilidad. El recelo relativo al futuro se ha tornado cada vez más palpable, sobre todo desde la desoladora muerte, el 28 de agosto, del Presidente del Colegio de Abogados de Puerto Príncipe, Monferrier Dorval, un respetado jurista cuyo asesinato simboliza, para muchos, la fragilidad del estado de derecho en el país. El asesinato del Sr. Dorval constituye una pérdida trágica para la sociedad haitiana, ya que fue un ejemplo de implicación cívica y de compromiso con la promoción del estado de derecho. En los últimos meses, los disturbios —a veces en forma de protestas violentas— se han extendido progresivamente, y la sensación de inseguridad se ha agudizado todavía más. Las bandas continúan desafiando a la autoridad del Estado, sobre todo en los barrios más populosos de Puerto Príncipe, y un grupo marginal de agentes de policía desafectos, que se hace llamar “Fantôme 509”, se ha dedicado, junto con sus seguidores, a sembrar el desorden en la capital en varias ocasiones.

Mientras las autoridades policiales y judiciales tratan con dificultad de hacer frente a los persistentes desafíos que se les presentan a la hora de satisfacer las demandas legítimas de la población haitiana en materia de seguridad y rendición de cuentas, sigue habiendo violencia y se siguen cometiendo violaciones de los derechos humanos. La sensación generalizada de impunidad que causan esas dinámicas solo puede contrarrestarse garantizando que se respeten los derechos de las víctimas de las violaciones y conculcaciones de los derechos humanos, así como exigiendo que los autores de esas violaciones rindan cuentas por sus actos.

Si bien la Policía Nacional de Haití ha demostrado sistemáticamente su competencia operacional desde que asumió la responsabilidad exclusiva de garantizar la seguridad en todo el territorio de Haití, necesitaría por lo menos otros 10.000 agentes de policía adecuadamente capacitados y equipados para poder cumplir con las pautas de actuación policial aceptadas internacionalmente y consolidar su capacidad de prestar a la población unos servicios de policía profesionales y respetuosos de los derechos humanos. Aunque la Policía Nacional de Haití, con el tiempo, ha demostrado ser capaz de contrarrestar algunas tendencias negativas, como el fuerte aumento de los homicidios y los secuestros observado en los últimos meses, necesita que su Gobierno le proporcione fondos y equipos suficientes para superar sus carencias recurrentes y para seguir desarrollándose a fin de cumplir con las pautas internacionales.

De igual modo, si bien se han logrado avances con miras a la puesta en marcha de la Comisión Nacional de Desarme, Desmovilización y Reintegración —órgano estatal encargado de coordinar los esfuerzos destinados a frenar la actividad de las bandas—, se necesitarán un apoyo continuado, una determinación política firme y una acción decisiva para asegurar que la Comisión sea capaz de desempeñar sus tareas mientras el Gobierno avanza hacia la aprobación de una estrategia nacional de

desarme, desmovilización y reintegración y de reducción de la violencia comunitaria e intensifica los esfuerzos encaminados a contrarrestar la proliferación de armas y municiones ilícitas.

La historia contemporánea de Haití ha demostrado una y otra vez que la intensa polarización política y la debilidad de las instituciones estatales son elementos catalizadores de la violencia. Desde mi última intervención ante el Consejo en junio (S/2020/568, anexo I), varias iniciativas gubernamentales, entre ellas la relativa a la reforma económica y de la gobernanza, han cobrado impulso a pesar de haberse topado con algunas críticas internas. Se promulgó un nuevo código penal, algunos de cuyos elementos brindarán en los próximos dos años la oportunidad de afinar el consenso en torno a un texto que todos los haitianos puedan asumir como propio. Por último, el reciente nombramiento por el Presidente Moïse del nuevo Consejo Electoral Provisional ha suscitado fuertes reacciones por parte de sectores de la sociedad haitiana, entre ellos el Tribunal de Casación, supuestamente por la falta de representatividad del órgano y el alcance de la misión que se le ha encomendado.

La constante falta de confianza entre las fuerzas políticas está impidiendo avanzar, salvo en un grado mínimo, en torno a prioridades que anteriormente habían gozado de un amplio consenso en todo el espectro político, como la necesidad de emprender una reforma constitucional para reflejar mejor las realidades actuales de Haití y abordar las principales deficiencias de la Constitución de 1987 antes de celebrar nuevas elecciones. Si bien la posibilidad de diseñar un proceso aceptable para todos se está reduciendo con rapidez, muchos interesados políticos consideran que el logro de un consenso político y el establecimiento de un Gobierno de unidad nacional son fundamentales para crear un entorno propicio a la celebración de elecciones participativas.

En un momento en que el país se dispone a iniciar un nuevo ciclo electoral, es indispensable que se aborden aspectos clave del proceso electoral, como el marco y el calendario electorales, a fin de reducir el riesgo de que las elecciones sean impugnadas y de que se produzcan nuevos actos de violencia. Si bien la BINUH seguirá recabando la participación de los interesados nacionales, insto a los Estados Miembros de las Naciones Unidas a que amplíen su apoyo a un proceso que, si se gestiona adecuadamente, contribuirá a garantizar que los comicios pendientes conduzcan a una renovación de los dirigentes elegidos de Haití, den lugar a una mayor representación de las mujeres en la vida política y revitalicen el contrato social entre los ciudadanos haitianos y el Estado.

Aunque en Haití ha sido menos virulenta de lo que se preveía inicialmente, la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) parece haber agravado los efectos ya debilitadores que los casi dos años de agitación sociopolítica han tenido en la economía del país. El advenimiento de la emergencia sanitaria en primavera frenó en seco cualquier posible recuperación económica, y, desde entonces, la situación no ha hecho más que deteriorarse. A pesar del aumento de las remesas y del reciente éxito de las medidas de fortalecimiento de la moneda nacional, los ingresos de los hogares de todo el país han disminuido mientras que los precios de los productos básicos han aumentado bruscamente, lo que ha dado lugar a un nuevo empeoramiento de la inseguridad alimentaria. Las inversiones en los sectores críticos de la industria manufacturera y la agricultura se han estancado, lo que ha conducido a la pérdida de miles de puestos de trabajo. En conjunto, la repercusión interna de la pandemia, así como el efecto que ha tenido en las economías de asociados comerciales fundamentales, contribuirá probablemente a que Haití experimente otro año de recesión en 2020.

Para contrarrestar los efectos de la prolongada crisis multidimensional y revitalizar la economía, el Gobierno tiene la intención de poner en marcha un plan de

recuperación económica posterior a la COVID-19 de tres años de duración, basado en el estímulo de la producción nacional y las exportaciones mediante la diversificación económica, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas y la inversión en los sectores de la energía y la agricultura. Asimismo, mediante la aplicación de la Política Nacional de Protección y Promoción Social recientemente aprobada, el Gobierno tratará de fortalecer las redes de seguridad social y mejorar la prestación de socorro a los más vulnerables, tarea que sin duda impulsará el aumento de los niveles de financiación de los donantes para la asistencia humanitaria.

Por encima de todo, son la capacidad de las clases políticas y económicas de Haití para ponerse de acuerdo y resolver sus diferencias sin recurrir a la violencia y la capacidad de las incipientes instituciones del país para adoptar las medidas necesarias las que determinarán si se celebrarán elecciones libres, justas e inclusivas en un clima favorable, y si los intentos de reactivar la economía y volver a encarrilar al país en una trayectoria de desarrollo positiva tendrán éxito y si se abordará finalmente el perenne problema de la impunidad.

Aprovechando la complementariedad de los diversos conocimientos especializados compartidos entre la BINUH y el equipo de las Naciones Unidas en el país, estamos dispuestos a seguir apoyando a las autoridades en la realización de esas empresas y a respaldar a Haití en sus esfuerzos encaminados a insuflar nueva vida a la agenda de desarrollo sostenible. Para cumplir eficazmente esas funciones, seguiremos transformando la forma en que trabajamos, haciendo un uso más eficiente de los recursos políticos y programáticos de las Naciones Unidas para abordar mejor los difíciles obstáculos estructurales que impiden lograr progresos significativos y tangibles en Haití.

Anexo II**Declaración del Ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, Roberto Álvarez Gil**

[Original: español]

Agradezco a la Enviada Especial del Secretario General en Haití, Helen Meagher La Lime, por la presentación de su detallado informe, el cual refleja claramente las diversas crisis por las cuales atraviesa Haití.

Quisiéramos iniciar nuestra intervención reconociendo los esfuerzos realizados por el Gobierno haitiano para contrarrestar los efectos de la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) en su país, bajo el liderazgo de su Comisión Multisectorial para la gestión de la crisis de la COVID-19.

Es de suma preocupación para la República Dominicana la profunda crisis social, económica, sanitaria y política que se vive en la hermana República de Haití, marcada por el estancamiento en la organización de las elecciones legislativas y la falta de consenso sobre una agenda política común que permita romper el impasse y definir un nuevo ciclo electoral que encamine a esa nación por un sendero de estabilidad duradero. Es por esto que, en la primera intervención dominicana sobre el tema haitiano frente al Consejo el año pasado, advertimos sobre el peligro de una salida prematura de la Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití sin antes haber alcanzado las condiciones adecuadas para ello (véase S/PV.8502). Esperamos que esta situación sirva de ejemplo cuando sea analizada la continuación de mandatos de otras misiones, a fin de no cometer el mismo error.

Esta compleja crisis política y económica ha degenerado en una imposibilidad de buena gobernanza y, por tanto, es de profunda preocupación para la República Dominicana. La situación económica, la inseguridad y la crisis alimentaria, que hoy alcanza a aproximadamente 5 millones de haitianos, según el Programa Mundial de Alimentos, afectan significativamente no solo a las operaciones del personal de Naciones Unidas, sino a todas las actividades tendentes a mejorar la situación de dicho país. El problema es multidimensional y requiere de una acción interdisciplinaria.

A pesar de que los homicidios intencionales denunciados a la policía disminuyeron un 12 % entre el 1 de junio y el 31 de agosto, la violencia y la impunidad continúan haciendo estragos y afectando el normal desenvolvimiento de la vida cotidiana. Los secuestros han repuntado; los continuos enfrentamientos entre pandillas han provocado recientemente el desplazamiento de cientos de familias. En los últimos días hemos escuchado con estupor cómo la violencia ha tronchado la vida productiva de ciudadanos de alto perfil como la del profesor, abogado y Presidente del Colegio de Abogados de Haití, Monferrier Dorval, así como la del padre del Director de la Policía, quien fue hallado muerto dentro de un tanque de agua. Estas acciones han sido interpretadas como amenazas y rechazo de sectores minoritarios que prefieren el caos y que apuestan en contra del proceso de reforma constitucional en el país.

Ojalá que, más temprano que tarde, los autores de estos atroces crímenes sean sometidos a la justicia; tanto la inacción como la impunidad son inaceptables. En este contexto, exhortamos a las Naciones Unidas a dotar a la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH) del personal necesario para que la misión pueda ser efectiva y pueda cumplir con su mandato. Conscientes de la contracción de la economía mundial, es preciso enfatizar que la BINUH necesita contar con todo el personal completo para poder aspirar a ser efectiva, y de similar forma, exhortamos a la BINUH, a la comunidad internacional y al Gobierno haitiano a redoblar sus esfuerzos en el apoyo al plan de desarrollo estratégico de la Policía Nacional de Haití para 2017-2021, y, asimismo, a brindarle al sistema judicial los recursos y las herramientas necesarias para proteger los derechos de los ciudadanos, en particular los de los más vulnerables.

Resulta paradójico que uno de los aspectos en los cuales las Naciones Unidas han logrado cierto éxito en Haití desde 2004 —generar una conciencia crítica sobre los derechos humanos entre la población— no encuentre el respaldo institucional para hacerlos valer ante la justicia; existe hoy una brecha entre las expectativas y demandas de la sociedad y la capacidad de los titulares de los derechos de lograr que se respeten.

La situación humanitaria en Haití continúa siendo preocupante. El 53 % de los hogares haitianos experimentaron hambre entre mayo y junio pasado, y se espera que el número de niños que sufren de desnutrición aumente en un 25 % a finales de año. En junio se lanzó un Plan de respuesta humanitaria revisado para 2020, cuyo objetivo es llegar a 2,3 millones de los 5,1 millones de haitianos considerados más vulnerables. Incluyendo la respuesta a la COVID-19, este plan requiere 472 millones de dólares. Sin embargo, de manera desconcertante, a 10 de septiembre del mes pasado, el fondo solo había recibido financiamiento en un 16 %. Esta situación podría agravarse por la aún activa temporada de huracanes.

Para minimizar estos agravantes, es necesario intensificar el trabajo de la mano del Gobierno de Haití y sus instituciones, para establecer mecanismos que permitan la evaluación de riesgos y el diseño de planes y estrategias para fortalecer a los sectores más afectados. Igualmente, se deben establecer canales de información y colaboración con las comunidades locales para ampliar los mecanismos de alerta temprana que ayuden en la planificación conjunta del impacto de los choques climáticos. La conjunción de crisis institucional, COVID-19 y fenómenos climáticos adversos puede ser una combinación demoledora para un país al que no podemos dejar solo.

La frontera compartida de la República de Haití y la República Dominicana implica que los procesos políticos, sociales, sanitarios y económicos de cada país impactan significativamente en el otro. El éxito de las políticas de salud, seguridad, defensa y adaptación al cambio climático requiere la coordinación binacional. Dada la situación de Haití, para lograr esa coordinación es imprescindible —repito: imprescindible— el apoyo y el acompañamiento de la comunidad internacional y los organismos multilaterales. La inestabilidad en Haití amenaza la de la República Dominicana y potencialmente la de la región. Por eso, la inercia o la elusión no pueden ser jamás políticas viables para el caso haitiano. En este contexto, una vez más, nos hacemos eco de las palabras del Secretario General al decir que:

“Si no recibe apoyo financiero adicional, el país tardará aún más en hacer frente a sus problemas de desarrollo.” (S/2020/537, párr. 32)

Y esto, distinguidos embajadores, no lo debería volver a permitir la comunidad internacional.

La buena vecindad entre los dos países no puede nunca perjudicar el principio de cumplimiento estricto de la legalidad dominicana e internacional. En estos casi dos años como miembro no permanente de este Consejo, la República Dominicana ha hecho propuestas coherentes sobre el proceso político en Haití; se ha abstenido en aquellas resoluciones que, aunque bien intencionadas, no han tomado en cuenta debidamente la realidad haitiana; y ha trabajado de forma bilateral y multilateral para avanzar la agenda de paz y seguridad para Haití, poniendo a disposición nuestros buenos oficios.

Al ser esta nuestra última participación sobre el tema en este Consejo, justo cuando la BINUH cumple un año de misión en Haití, al tiempo que dicho país se encuentra bajo condiciones políticas, socioeconómicas y de seguridad más precarias que las del año pasado, queremos enfatizar nuestra reiterada preocupación de que a pesar de los avances del plan Una ONU y aún con el apoyo del equipo país de las Naciones Unidas a las autoridades haitianas, este Consejo no puede darse el lujo de transferir las responsabilidades de la Misión al gobierno haitiano mientras persistan la profunda inestabilidad política y la crisis humanitaria actuales en ese país.

No obstante, es vital dejar claramente establecido nuestro firme convencimiento de que el bienestar y el futuro de los pueblos están en manos de sus ciudadanos. La comunidad internacional, a pesar de ser un soporte adicional y fundamental, no puede generar los cambios necesarios en Haití por sí sola. Es imprescindible la participación activa de la sociedad civil y el liderazgo político haitiano, incluido un concurso efectivo de la diáspora, con criterios unificados y encaminados hacia una agenda común. Lo anterior solo puede lograrse si el proceso electoral pendiente en Haití es exitoso.

Por ello exhortamos a la comunidad internacional a tomar un papel más activo en la organización de ese proceso y a extender el mandato de la BINUH, dotándola, además, de los recursos necesarios para su correcto funcionamiento. La BINUH debe facilitar un Pacto Político amplio en Haití, que garantice la celebración de las elecciones legislativas, que es la tarea más urgente.

Finalmente, el gobierno dominicano hace un llamado a la comunidad internacional a proveer al pueblo haitiano la ayuda humanitaria que tanto requiere y los recursos necesarios para poder invertir en infraestructura y en la creación de empleos.

La República Dominicana continuará una política abierta a la colaboración sostenida con el pueblo de Haití, una colaboración que caracteriza el profundo sentimiento solidario de nuestro pueblo, pero también declara con igual firmeza que no hay ni podrá haber una solución dominicana a la situación haitiana.

Anexo III**Declaración del Representante Permanente de Bélgica ante las Naciones Unidas, Philippe Kridelka**

[Original: francés]

Agradezco a la Representante Especial del Secretario General Meagher La Lime su exposición informativa y sus incansables esfuerzos por crear un ambiente de confianza y responsabilidad en Haití.

Hoy deseo abordar tres cuestiones, en primer lugar, la importancia de las elecciones, la estabilidad y la responsabilidad política; en segundo lugar, la necesidad de promover los derechos humanos y de combatir la impunidad y la inseguridad; y, en tercer lugar, el papel de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH).

En primer lugar, el clima político sigue estando muy polarizado y se carece de un programa político común. La incertidumbre sobre el calendario electoral, la composición del nuevo Consejo Electoral Provisional y la necesaria reforma constitucional siguen siendo factores de inestabilidad. Nos preocupa el aumento en el número de pandillas violentas y su repercusión en las instituciones del Estado. En aras de la legitimidad del sistema político, urge acordar un calendario realista para la celebración de las elecciones. Será esencial que las mujeres participen en todas las etapas del proceso electoral.

En segundo lugar, en lo que respecta a los derechos humanos y a la lucha contra la impunidad y la inseguridad, condenamos enérgicamente el espantoso asesinato de Monferrier Dorval, un abogado muy respetado. La participación activa de la sociedad civil es para nosotros particularmente crucial y no puede ser silenciada. Instamos a las autoridades a no escatimar esfuerzos para llevar a los autores de ese asesinato ante la justicia. Seguimos profundamente preocupados por el hecho de que los autores de las masacres en gran escala siguen en libertad y por las continuas denuncias de complicidad entre las pandillas y agentes estatales. En ese sentido, acogemos con beneplácito las medidas adoptadas para aumentar la capacidad operativa de la Inspección General de la Policía Nacional. La policía debe seguir siendo una preocupación primordial de la BINUH y de los principales donantes, que han hecho grandes inversiones, por ejemplo, en la Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití, para hacer que la Policía Nacional de Haití sea más profesional y fiable. Es preciso que no se pierdan los progresos registrados en ese ámbito, sobre todo en la etapa que precede a las fechas de vencimiento de plazos políticamente sensibles para el país.

La pandemia ha puesto de relieve las dificultades que enfrenta la protección, sobre todo de las mujeres y las niñas, que corren un mayor riesgo de violencia sexual y de género. En ese sentido, la respuesta nacional cuenta con el apoyo de la Iniciativa Spotlight sobre género, que impulsan las Naciones Unidas y la Unión Europea. El nuevo código penal armoniza aún más el marco jurídico de Haití con las normas jurídicas y de derechos humanos internacionales. Esperamos que, entre otras cosas, esto conduzca a un enfoque más humano de la aplicación de la ley, ayude a reducir el hacinamiento en las cárceles y proteja mejor a la comunidad de personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales.

Por último, Bélgica apoya plenamente la labor que realiza la BINUH para facilitar el diálogo político en Haití. Habida cuenta del alto nivel de polarización imperante, es ahora más importante que nunca abordar el déficit de confianza y promover un entorno político más propicio. Acogemos con beneplácito la estrecha cooperación que existe entre la BINUH y el equipo de las Naciones Unidas en el país en lo que respecta a la puesta en práctica del marco estratégico integrado. Alentamos

a las autoridades haitianas a que aprueben el establecimiento en el país de una oficina autónoma del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que podría ayudar Haití a abordar los diversos desafíos a los que me he referido hoy.

Haití no puede enfrentar sus desafíos solo. Junto con nuestros asociados de la Unión Europea, estamos proveyendo apoyo financiero, técnico y político, y hacemos un llamamiento a todos los asociados internacionales a hacer lo mismo.

Anexo IV**Declaración del Representante Permanente Adjunto de China ante las Naciones Unidas, Geng Shuang**

[Original: chino]

China agradece a la Representante Especial Meagher La Lime su exposición informativa.

Desde la anterior sesión celebrada en el Consejo de Seguridad en junio sobre esta cuestión (véase S/2020/568), Haití ha estado sumido en un estancamiento político prolongado y una crisis constitucional continua, con una situación de seguridad que se ha deteriorado y ha puesto en peligro a su población. La situación de las mujeres es particularmente preocupante. La realidad económica es grave y la enfermedad por coronavirus dificulta aún más la disponibilidad de medios de subsistencia para los haitianos, ya de por sí escasos. No hay señales de que las crisis política, económica y social a las que se enfrenta Haití estén disminuyendo.

Para resolver esas crisis y lograr la estabilidad y el desarrollo, Haití debe recurrir en última instancia a sus propios esfuerzos, y las autoridades haitianas tienen la responsabilidad primordial en ese sentido. Sin embargo, es lamentable que las capacidades del Gobierno de Haití en materia de gobernanza sean tan insuficientes y que la corrupción haya persistido a pesar de las prohibiciones reiteradas. Según el informe del Secretario General (S/2020/944), algunas autoridades gubernamentales han cometido abusos. Según informes, algunos agentes de policía haitianos salieron a la calle para protestar contra los salarios bajos, e incluso intercambiaron disparos con agentes de policía que estaban de servicio. El Gobierno de Haití debe ser más eficaz en el mejoramiento de su capacidad de gobernanza, asumir sus propias responsabilidades y situarse a la altura de las expectativas de la población.

Al mismo tiempo, las autoridades haitianas y diversas facciones del país deben anteponer los intereses del pueblo, abandonar los intereses personales, dejar de lado sus diferencias y comprometerse a celebrar un diálogo inclusivo y una consulta extensa para alcanzar una solución política. Haití celebrará elecciones presidenciales el próximo año. Los preparativos de las elecciones deben realizarse de conformidad con la Constitución y las leyes de Haití y basarse en un amplio consenso entre las diversas partes para garantizar la legitimidad y la credibilidad de las elecciones.

Haití, el primer país de América Latina en lograr la independencia, estuvo bajo la ocupación y el control extranjeros durante décadas. Los recursos nacionales fueron saqueados durante muchísimo tiempo. Su pueblo quedó sumido en la pobreza y el sufrimiento. China se solidariza con el pueblo haitiano por su lamentable experiencia histórica y siempre ha pedido a la comunidad internacional que aumente su asistencia a Haití. En los últimos diez años, Haití ha recibido miles de millones de dólares en ayuda, pero no ha habido mejoras fundamentales en la vida de los haitianos. Los principales donantes a Haití deberían prestar atención a las necesidades y prioridades del país e invertir fondos en las esferas que el pueblo haitiano necesita con más urgencia, en particular las de la reducción de la pobreza y el desarrollo económico y social. El Gobierno de Haití también debería utilizar la ayuda de manera juiciosa y eficaz y mejorar constantemente la eficacia de la asistencia que recibe.

El mandato de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH) terminará el 15 de octubre. Como misión política especial, la BINUH, establecida hace un año, ha realizado algunos esfuerzos por promover el diálogo entre el Gobierno de Haití y la oposición. Sin embargo, se ha avanzado poco. No hay una solución externa al problema de Haití. A menos que todas las partes de Haití demuestren realmente su voluntad política, resultará imposible romper el estancamiento. Por consiguiente, recomendamos que el Consejo de Seguridad examine la futura presencia de las Naciones Unidas en Haití a la luz de la evolución de la situación para que realice una evaluación y tenga en cuenta sus anteriores experiencias y lecciones aprendidas.

Anexo V

Declaración de la Misión Permanente de Estonia ante las Naciones Unidas

Quisiera agradecer a la Representante Especial del Secretario General Helen Meagher La Lime su exposición informativa. También quisiera expresar el firme apoyo de Estonia a las actividades de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití y a la labor de la Representante Especial.

A Estonia le preocupa la falta de estabilidad política en Haití. Es necesario avanzar más para elaborar un programa de reforma consensuado y garantizar elecciones libres, limpias y transparentes. A fin de impulsar el proceso político es necesario que se establezca un diálogo amplio que dé lugar a un consenso nacional.

Instamos a que se adopten medidas más firmes contra la inseguridad y la impunidad. A pesar de que se ha avanzado un poco, aún no se ha hecho justicia. Los ejemplos de las matanzas de Raboteau, Lilavois, Grand Ravine, La Saline y Bel Air demuestran la falta de rendición de cuentas por las violaciones y abusos de los derechos humanos. La impunidad también es un factor que contribuye al aumento de la violencia relacionada con las bandas. Reiteramos la importancia de mejorar la rendición de cuentas y exhortamos al Gobierno de Haití a que modernice el sistema de justicia. Es necesario fortalecer las instituciones judiciales para garantizar que todos los casos se investiguen adecuadamente y que se enjuicien a los autores por sus delitos.

Acogemos con beneplácito el nombramiento de una nueva Ministra Delegada para los Derechos Humanos y la Lucha contra la Pobreza Extrema. Esa es una señal del compromiso del Gobierno de fortalecer las políticas nacionales en materia de derechos humanos. Alentamos a las autoridades a que apoyen el establecimiento de una oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Haití. En una perspectiva a largo plazo, ello ayudaría a mantener lo que ya se ha logrado.

Encomiamos todas las medidas adoptadas por el Gobierno de Haití para combatir la pandemia de enfermedad por coronavirus. Es de suma importancia abordar los efectos socioeconómicos de la pandemia, la cual ha aumentado la vulnerabilidad y la desigualdad del pueblo de Haití. La aplicación del plan de evaluación y recuperación apoyado por las Naciones Unidas puede ser un gran apoyo a Haití para hacer frente a la situación ya grave.

Haití y su pueblo merecen un Estado estable con democracia, estado de derecho y desarrollo sostenible. Ello es lo que esperamos que logre conseguir el Gobierno de Haití. Más importante aún, es lo que el pueblo haitiano tiene derecho a esperar de sus líderes políticos.

Para concluir, alentamos a todas las partes a seguir trabajando con un espíritu constructivo. Seguimos albergando la esperanza de que los esfuerzos constantes forjen un futuro mejor para Haití.

Anexo VI

Declaración de la Representante Permanente Adjunta de Francia ante las Naciones Unidas, Nathalie Broadhurst Estival

[Original: francés e inglés]

También doy las gracias a la Representante Especial del Secretario General en Haití, Sra. Helen Meagher La Lime, por su exposición informativa sumamente amplia y esclarecedora.

Haití está atravesando actualmente por una crisis que es sobre todo política. Observamos con gran preocupación el continuo deterioro de la situación institucional. De hecho, recuerdo que, debido a la falta de elecciones, el Parlamento no ha podido reunirse desde enero y no se ha instalado el Gobierno nombrado en marzo. Deploramos que todas las iniciativas de diálogo hayan fracasado en los últimos dos años.

Sin embargo, como todos sabemos, la solución de esta crisis solo se podrá lograr mediante un diálogo nacional inclusivo entre todas las fuerzas políticas del país, incluidos la oposición, la sociedad civil y el sector privado. Ese diálogo es indispensable para garantizar la organización creíble y transparente de las próximas elecciones y la revisión de la Constitución, si eso es lo que realmente desean los haitianos. Francia insta al Presidente Jovenel Moïse a que esté a la altura de las circunstancias y ponga fin al estancamiento.

Ese llamamiento a la responsabilidad política es más necesario que nunca puesto que la credibilidad de las instituciones se ha visto sumamente socavada en Haití por los casos de corrupción. La sociedad civil haitiana ha reclamado durante muchos años transparencia ante esos casos, que destruyen la confianza de la población en sus instituciones. Tener en cuenta esas reivindicaciones es una condición fundamental para restablecer la confianza con la población haitiana. Por ello, la lucha contra la corrupción debe ser máxima prioridad de la clase política haitiana.

La sociedad haitiana tiene demandas bastante legítimas en materia de seguridad y respeto de los derechos humanos, que deben ser escuchadas por las autoridades. Condenamos enérgicamente el asesinato del Presidente del Colegio de Abogados de Puerto Príncipe, Maître Dorval, el 28 de agosto. Ese asesinato es un símbolo extremadamente preocupante de la inseguridad cada vez mayor que se viene produciendo desde principios de año y de la violencia de las bandas que operan con impunidad. También pienso en las matanzas en La Saline y Bel Air, que han dado lugar a que se elaboren informes condenatorios por las Naciones Unidas. En vista de esa situación, es indispensable que el Estado haitiano garantice la seguridad de sus ciudadanos y asegure que los responsables de esa violencia sean llevados ante la justicia. La Policía Nacional de Haití se está movilizandose para hacer frente a la situación; debe estar fuera de toda duda para asegurar el respeto del estado de derecho.

Además, como sabemos, la pandemia de enfermedad por coronavirus ha pesado mucho en una situación económica, humanitaria y social ya extremadamente deteriorada. Millones de haitianos viven en una situación muy precaria, y esa tendencia se acentúa cada vez más. Francia y la Unión Europea seguirán movilizándose para prestar toda la asistencia humanitaria necesaria para responder a las necesidades más urgentes.

Todos somos conscientes de que el carácter multidimensional de la crisis en Haití hace que su solución sea especialmente compleja. Un año después de su establecimiento, la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH) se ha movilizadose sin descanso, bajo el liderazgo de la Sra. Meagher La Lime, para apoyar a Haití. La BINUH realiza una labor absolutamente indispensable en apoyo del diálogo político y en el ámbito de la gobernanza y el fortalecimiento del estado de derecho. Debe proseguirse esta labor y la BINUH debe recibir todos los medios necesarios para cumplir plenamente su mandato.

El Consejo de Seguridad seguirá manteniendo plena vigilancia y adoptará las medidas apropiadas, en particular si la situación en Haití sigue empeorando. Por último, deseo reafirmar que Francia está más que nunca al lado de Haití y de los haitianos para encarar los desafíos que plantea la crisis actual y construir el entorno de estabilidad y prosperidad al que legítimamente aspiran.

Anexo VII

Declaración del Representante Permanente Adjunto de Alemania ante las Naciones Unidas, Günter Sautter

Quisiera formular cuatro observaciones. Estas se refieren a los aspectos siguientes: la crisis política, la violencia relacionada con las bandas, los sectores de la policía y de la justicia y, por último, la labor de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH).

Comenzaré con la crisis política. Permítaseme decir, ante todo, que nos decepciona que los interesados haitianos aún no hayan alcanzado un consenso mínimo sobre una agenda política que aborde las causas fundamentales de los problemas que Haití ha estado enfrentando desde hace mucho tiempo. Alentamos a todas las partes interesadas a llegar a un acuerdo sobre la revisión de la Constitución, la aplicación de las reformas y un marco electoral realista que permita celebrar elecciones creíbles y transparentes.

Condenamos en los términos más enérgicos posibles el asesinato, el 28 de agosto, de Monferrier Dorval. Este hecho constituye un grave revés, y nos sumamos al llamamiento del Secretario General a las autoridades haitianas para que no escatimen esfuerzos a fin de hacer comparecer a los autores de este delito ante la justicia.

En cuanto a la violencia relacionada con las bandas, seguimos muy alarmados por el resurgimiento de este tipo de actividad de las bandas, que tiene una larga y terrible tradición en Haití. Nos preocupa sobre todo tener conocimiento de que ciertos agentes políticos y empresarios tienen estrechos vínculos con las bandas delictivas. Condenamos enérgicamente todas las acciones que socavan los procesos democráticos y el estado de derecho, y pedimos a todas las partes interesadas que se abstengan de actos que podrían contribuir a la inestabilidad.

Es importante que el Gobierno siga apoyando a la Comisión Nacional de Desarme, Desmovilización y Reintegración. Deploramos, una vez más en este contexto, los escasos progresos realizados en la búsqueda de la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos, como los sucesos que han tenido lugar en La Saline, Bel-Air y Grand Ravine, y lo mismo ocurre con los escándalos de corrupción. Alentamos al Gobierno a que apoye el establecimiento de una oficina independiente del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos en Haití, a fin de salvaguardar la continuidad de la colaboración con las autoridades estatales en materia de derechos humanos.

Mi tercera observación se refiere a los sectores policial y de la justicia, donde se han registrado algunos avances esperanzadores. Esperamos que estas señales positivas de la continua profesionalización de la Policía Nacional de Haití cobren impulso, en un entorno cada vez más difícil. En este contexto, la rendición de cuentas de los miembros de las fuerzas policiales por sus actos reviste suma importancia, ya que ello permitirá fomentar la confianza en la policía como institución.

Al mismo tiempo, seguimos preocupados por el hecho de que la limitada cantidad de recursos proporcionados a la Policía Nacional de Haití en los últimos años comienza a erosionar no solo la capacidad operacional de la organización, sino también la confianza pública en la única institución de seguridad pública nacional que funciona en el país. Asimismo, nos preocupa la creciente tendencia a la polarización de las fuerzas policiales, en especial en lo que respecta a un grupo violento de expolicías, en su mayoría, pero también activos, llamado Fantôme 509. También nos preocupa el apoyo a un grupo denominado “G9 an fanmi”.

Asimismo, persisten grandes desafíos en los sectores de la justicia y las instituciones penitenciarias. Al respecto, es muy ilustrativo el hecho de que la tasa de

ocupación de las cárceles haya aumentado un 338 %, principalmente debido al aumento del número de detenidos en prisión preventiva como consecuencia de la congestión en el sector judicial. Acogemos con beneplácito el apoyo prestado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz, a fin de lograr una reducción del número de reclusos en las cárceles y los centros de detención en el contexto de la pandemia de enfermedad por coronavirus.

Mi última observación se refiere a la labor de la BINUH. Reafirmamos nuestro apoyo constante a la labor de una misión y a los 19 organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas en Haití que trabajan y actúan como una sola Naciones Unidas. Estamos a favor de una prórroga del mandato de la BINUH, que se negociará en los próximos días. Todos los componentes del mandato siguen siendo pertinentes para nosotros y, por supuesto, seguimos apoyando plenamente la importante labor de la Representante Especial del Secretario General, Helen Meagher La Lime, y de todo su equipo en relación con Haití.

Anexo VIII

Declaración del Representante Permanente de Indonesia ante las Naciones Unidas, Dian Triansyah Djani

Para empezar, quisiera dar las gracias a la Representante Especial del Secretario General, Excma. Sra. Helen Meagher La Lime, por su amplia exposición informativa.

A Indonesia le preocupa la falta de progresos en el país, como se demuestra en el informe del Secretario General (S/2020/944). Lamentablemente, el pueblo de Haití sigue pagando el precio de la inestabilidad e inseguridad, y enfrenta a un aumento de la inflación, la pobreza y el hambre. En este sentido, quisiera señalar a la atención del Consejo los tres aspectos siguientes.

En primer lugar, la estabilidad política es un factor clave, y la polarización política y el estancamiento de Haití no hacen sino recrudecer la situación. A este respecto, reitero mi llamamiento a todas las partes interesadas para que dejen de lado sus diferencias y trabajen de consuno en la búsqueda de terreno común mediante el diálogo nacional con miras a celebrar elecciones libres, limpias y satisfactorias. Una vez más, la responsabilidad recae en las autoridades haitianas, que tienen la obligación de garantizar un entorno pacífico y estable. Tienen el deber de crear las condiciones necesarias para avanzar.

En segundo lugar, en cuanto a la situación de la seguridad y la violencia comunitaria, Indonesia encomia los constantes esfuerzos de la Comisión Nacional de Desarme, Desmovilización y Reintegración por consolidar la seguridad como la principal institución nacional en el ámbito de la reducción de la violencia comunitaria. No obstante, nos preocupa que, a pesar de que se han registrado varios acontecimientos importantes, persisten grandes desafíos en los sectores policial, judicial y penitenciario. En ese sentido, instamos a las autoridades haitianas a desplegar más esfuerzos significativos para defender el estado de derecho y combatir la corrupción y la impunidad, en especial en el contexto de la pandemia. Las actividades delictivas relacionadas con las bandas también van en aumento. Esto puede ser señal de que la situación escapa aún más de todo control, y es preciso adoptar medidas audaces.

En tercer lugar, en relación con los desafíos económicos y sociales, como mencioné anteriormente, el pueblo de Haití es el que más padece. Los estragos políticos alejan su prosperidad. Es necesario abordar los graves problemas económicos y sociales en consecuencia, al tiempo que se busca una solución política. Se necesitarán esfuerzos de recuperación sólidos para invertir las tendencias negativas y revitalizar la economía. En este sentido, mi delegación alienta a las autoridades haitianas a respaldar la evaluación de las repercusiones socioeconómicas y el plan de recuperación apoyados por las Naciones Unidas.

Para concluir, apoyamos al Secretario General al instar a las autoridades haitianas a que establezcan un consejo electoral provisional plenamente funcional para garantizar unas elecciones libres, limpias y transparentes que confieran legitimidad al sistema político y refuercen las instituciones del Estado y la buena gobernanza.

Indonesia encomia a la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití, al equipo de las Naciones Unidas en el país y al personal de las Naciones Unidas sobre el terreno por su notable dedicación a ayudar al pueblo haitiano a hacer realidad su derecho a vivir en condiciones de paz y estabilidad.

La situación es crítica. El apoyo internacional es más necesario que nunca, pero las autoridades haitianas deben asumir la iniciativa.

Anexo IX**Declaración del Representante Permanente Adjunto
Primero de la Federación de Rusia ante las Naciones Unidas,
Dmitry Polyanskiy**

[Original: ruso]

Agradecemos a la Representante Especial del Secretario General, Sra. Helen Meagher La Lime, la exposición informativa que nos ha ofrecido sobre la situación en el país y la labor de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH).

El aumento de la tensión en Haití, que ya hace varios meses que dura, suscita gran preocupación. La causa fundamental de la inestabilidad es la falta de progresos en el diálogo interno entre las fuerzas políticas y la sociedad, que ha llevado a la parálisis de facto del poder legislativo. A su vez, eso ha incidido en la capacidad del Estado para hacer frente con eficacia a la labor cotidiana urgente, principalmente la de garantizar la seguridad de la población. En consecuencia, los elementos criminales se han vuelto más activos. Todo ello se ha complicado a raíz de la pandemia de enfermedad por coronavirus. La segunda ola pronto supondrá un nuevo desafío para el sistema de atención sanitaria, cuyo estado no es difícil de imaginar, dada la deplorable situación económica del país.

El informe del Secretario General (S/2020/944) nos da una impresión ambigua. Por una parte, las evaluaciones que contiene no dejan lugar a dudas sobre la necesidad de ampliar la misión de las Naciones Unidas para mantener el apoyo internacional en un período tan difícil para el país. Por otra parte, es evidente que su tarea clave de ayudar a entablar un diálogo nacional sigue pendiente. Se corre el riesgo de que los haitianos opten por la vía de las decisiones unilaterales, y eso, como es sabido, no hace sino aumentar el peligro de una escalada de la tensión.

Vemos que la propuesta de superar la crisis mediante una modificación de la ley fundamental del país tuvo una acogida dispar, incluso por parte del poder judicial del Estado. Es significativo que el Tribunal Supremo de Haití se negara a investir a los miembros del consejo electoral provisional. La sociedad está dividida. Sin embargo, hay quienes creen que ha llegado el momento de modificar la Constitución y, si los haitianos así lo deciden, las Naciones Unidas siempre defenderán el cumplimiento de la legislación vigente, independientemente del país de que se trate.

Todo esto, por supuesto, es un asunto interno de los propios haitianos, que deben sentarse a la mesa de negociaciones y dirimir sus diferencias. Por lo tanto, entendemos la posición de aquellos haitianos que se indignaron por la declaración de un funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos que amenazó con consecuencias para los que no estén de acuerdo con las ideas estadounidenses sobre la democracia. En los Estados Unidos, por alguna razón, se considera normal insistir en las elecciones en el caso de un país y, en el caso de otro país, instar a los políticos a que ignoren las elecciones y exijan la dimisión del jefe de Estado elegido legalmente. Con semejante doble rasero, no es de extrañar que el número de crisis en todo el mundo vaya en aumento, a pesar de los esfuerzos de las Naciones Unidas por resolverlas.

El conjunto de problemas que se ha acumulado en Haití debe abordarse urgentemente, empezando por lo principal: la estabilización política. Esto solo es posible mediante un diálogo basado en la legislación vigente, que debería conducir a la celebración de elecciones y aumentar la confianza y el apoyo de la población en general. Si no se hace así, el país corre el riesgo de volver a su pasado más oscuro, y entonces la recuperación y el desarrollo se quedarán aplazados durante muchos años.

Exhortamos a los haitianos a que entablen urgentemente un diálogo interno para encontrar una solución a la crisis. La misión de las Naciones Unidas debería ayudar en ese sentido. Puerto Príncipe necesita una asistencia internacional responsable a fin de evitar una mayor división de la sociedad y el desencadenamiento de una crisis humanitaria a escala regional.

En calidad de miembro del Consejo de Seguridad, Rusia seguirá trabajando para que la asistencia internacional de las Naciones Unidas se traduzca en una verdadera normalización de la situación en Haití y en el fortalecimiento de su soberanía y autosuficiencia.

Anexo X**Declaración de la Representante Permanente de San Vicente y las Granadinas ante las Naciones Unidas, Inga Rhonda King**

Para comenzar, en nombre de los miembros africanos del Consejo de Seguridad —a saber, el Níger, Sudáfrica y Túnez— y de San Vicente y las Granadinas (A3+1), quisiera dar las gracias a la Representante Especial del Secretario General, Sra. Helen Meagher La Lime, por su amplia exposición informativa. Encomiamos además a la Representante Especial del Secretario General y a su equipo por los esfuerzos que han realizado para ayudar a impulsar el proceso de consolidación de la paz en Haití durante el primer año de funcionamiento de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH).

La situación en Haití es extremadamente compleja. Han transcurrido unos ocho meses desde que la 50ª legislatura concluyó su mandato y todavía no se han celebrado elecciones parlamentarias. El consiguiente vacío institucional creado por la ausencia de un parlamento ha obstaculizado aún más la estabilidad socioeconómica y política del país. Si a ello se suman los problemas multidimensionales que acarrea la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y las vulnerabilidades que Haití presenta desde hace tiempo, la situación actual puede descontrolarse.

El A3+1 toma nota de los escasos progresos logrados en relación con los seis puntos de referencia de la BINUH, como se destaca en el último informe del Secretario General (S/2020/944), y encomia al Gobierno de Haití por su respuesta a la pandemia bajo la dirección de la comisión multisectorial para la COVID-19 y en cooperación con las Naciones Unidas. Si bien la pandemia ha tenido una incidencia moderada en Haití, nuestro hermano país caribeño aún no está, ni de lejos, fuera de peligro, en lo que respecta tanto a la respuesta a la pandemia como a la solución de los problemas pendientes. En este sentido, el A3+1 ofrece la siguiente perspectiva.

En primer lugar, en el frente político, la incertidumbre que rodea las elecciones y la crisis constitucional son muy preocupantes. Corresponde a todos los interesados haitianos entablar un diálogo inclusivo y constructivo y asumir sus responsabilidades colectivas para resolver el actual estancamiento político. Deseamos aprovechar esta oportunidad para subrayar, en consonancia con nuestras intervenciones anteriores sobre Haití, que el diálogo sigue siendo el único medio viable para lograr una solución pacífica del estancamiento político. A este respecto, instamos a todos los dirigentes políticos haitianos a que entablen un diálogo nacional y se abstengan de cometer actos que puedan desencadenar más violencia y comprometer los logros del país bajo la dirección de las Naciones Unidas. Por lo tanto, es importante que los dirigentes políticos haitianos procedan a la urgente formación de un Gobierno de manera que el Estado pueda cumplir su mandato, incluida la prestación de servicios a su población, y atraer más apoyo bilateral y multilateral.

En segundo lugar, el grupo A3+1 reitera su apoyo al papel de la Comisión Nacional de Desarme, Desmovilización y Reintegración en la reducción de la violencia comunitaria. Alentamos al Gobierno a que adopte urgentemente las medidas necesarias para aprobar el proyecto de estrategia nacional de reducción de la violencia comunitaria, ya que representa una oportunidad fundamental para poner coto a la delincuencia y la violencia que asolan Haití. Igualmente, el proyecto de estrategia puede ayudar a reforzar el aparato de seguridad del Estado.

Además, aplaudimos la contribución de las Naciones Unidas mediante sus iniciativas del Fondo para la Consolidación de la Paz encaminadas a reducir al mínimo la violencia comunitaria y a fortalecer la capacidad de la Policía Nacional de Haití. Es necesario destinar recursos suficientes a la Policía Nacional de Haití para que esa institución fundamental pueda cumplir eficazmente su mandato, lo que

incluye una campaña intensiva de reclutamiento y capacitación. También instamos al Gobierno a que aplique efectivamente el plan de desarrollo estratégico de la Policía Nacional de Haití para 2017-2021.

Agradecemos además los esfuerzos por mejorar el papel de las mujeres en la Policía Nacional de Haití. La participación plena y efectiva de las mujeres en la vida política y económica de Haití reviste una importancia crucial para la promoción de la paz y la seguridad. Las mujeres son un componente integral en Haití y, como tales, debe ser una prioridad empoderarlas mediante mecanismos apropiados y facilitar su participación equitativa en los procesos oficiales y oficiosos.

Seguimos preocupados por el flagelo de la violencia resultante de las actividades de las bandas en todo Haití. La expansión de sus redes y la amalgama de otras, como el recientemente formado G9, tienen el potencial de empeorar la situación de la seguridad en el país. Por lo tanto, el grupo A3+1 acoge con satisfacción los esfuerzos de la Policía Nacional de Haití en la lucha contra estas plagas.

La paz y la seguridad, pilares centrales del Consejo de Seguridad, no pueden separarse de la lucha contra las violaciones de los derechos humanos. Instamos a las autoridades a que se ocupen de la falta de rendición de cuentas y la impunidad en los casos de violaciones de los derechos humanos, incluida la violencia sexual y de género. Observamos que el Gobierno de Haití ha nombrado al Ministro de Derechos Humanos y, por lo tanto, esperamos que esto ayude a la nación a mejorar su historial en materia de derechos humanos. Reiteramos la importancia de respetar el derecho internacional de los derechos humanos y pedimos que todos los perpetradores rindan cuentas.

Quisiera hacer una tercera observación. Las realidades socioeconómicas siguen siendo nefastas y, además de la complejidad de la pandemia de COVID-19, Haití sigue afrontando la amenaza existencial del cambio climático, como lo demuestra la devastadora tormenta tropical de este año, que se cobró 31 vidas y dejó a muchos sin hogar y en situación de peligro.

La inseguridad alimentaria aguda y las sombrías perspectivas económicas agravan aún más estos problemas, y es desgarrador y muy preocupante que los niños sigan padeciendo malnutrición. En consecuencia, el grupo A3+1 hace un llamamiento a la comunidad internacional para que siga prestando apoyo humanitario al pueblo de Haití.

También reiteramos nuestro llamamiento a la condonación y el alivio de la deuda para ayudar a Haití a hacer frente a sus problemas económicos. Sostenemos que el alivio de la deuda basado en la magnitud de las conmociones exógenas es un elemento inevitable de cualquier debate serio sobre el desarrollo centrado en Haití. El desarrollo y la salud económica de Haití también deben incluir una evaluación estructurada de su vulnerabilidad y resiliencia.

El grupo A3+1 señala con insistencia al Consejo que, mientras no se aborde de manera fundamental el legado de subdesarrollo de Haití, la estabilidad y el desarrollo sostenible en el país seguirán siendo difíciles de alcanzar. Por consiguiente, estamos convencidos de que, durante este Decenio Internacional de los Afrodescendientes, debe iniciarse un proceso de diálogo para compensar debidamente los legados del subdesarrollo en Haití. La importancia histórica de la Revolución Haitiana y su significado simbólico de triunfar sobre la adversidad en la búsqueda de la libertad, la igualdad y el control del propio destino siguen siendo una inspiración para todos.

Para concluir, el grupo A3+1 reafirma su apoyo a la BINUH y recalca la importancia de contar con suficiente financiación para que pueda cumplir eficazmente su mandato. En consecuencia, renovamos nuestro apoyo a la prórroga del mandato de la BINUH.

Las necesidades de Haití son a largo plazo, pero sus actuales desafíos socioeconómicos y políticos son muy inmediatos. La titularidad haitiana sigue siendo fundamental para resolver los problemas existentes. Este no es el momento de titubear o continuar con opiniones divergentes sobre las elecciones o la reforma constitucional, sino de que los haitianos se unan, en un espíritu de avenencia, para superar sus desafíos.

Exhortamos a las Naciones Unidas, a la Comunidad del Caribe, a la Organización de los Estados Americanos y a la comunidad internacional en general a que sigan acompañando a Haití en el logro de la estabilidad política y socioeconómica.

Anexo XI**Declaración de la Coordinadora Política Adjunta del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ante las Naciones Unidas, Alice Jacobs**

Seré breve esta mañana. Doy las gracias a la Representante Especial del Secretario General por su exhaustiva actualización. El Reino Unido reconoce las difíciles circunstancias que se han enfrentado desde el último informe del Secretario General (S/2020/944), como lo han descrito hoy la Representante Especial y otros, y acogemos con beneplácito los progresos realizados. El pueblo de Haití merece que se ponga fin a la disfunción que ha asolado a las instituciones del Estado y la gobernanza en ese país durante tanto tiempo.

Quisiera comenzar sumándome a otros para pedir la celebración de elecciones legislativas creíbles y transparentes lo antes posible. Son necesarias para encaminar a Haití hacia la estabilidad y la prosperidad.

Los progresos simultáneos en materia de derechos humanos son fundamentales para sustentar la estabilidad. El Reino Unido acoge con beneplácito el nombramiento de una Ministra Delegada para los Derechos Humanos y la Lucha contra la Pobreza Extrema. Este es un paso importante para demostrar la voluntad política de salvaguardar los derechos humanos. Sin embargo, nos preocupa que el Consejo de Ministros aún no haya aprobado el plan de acción nacional sobre los derechos humanos.

También quisiera expresar nuestra profunda preocupación por el asesinato del Presidente del Colegio de Abogados de Puerto Príncipe, Monferrier Dorval. El Reino Unido pide que se realice una investigación rápida y transparente al respecto y acoge con beneplácito el compromiso del Presidente Moïse de hacer que los autores rindan cuentas de sus actos.

La creación, hace casi un año, de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH) reflejó la convicción del Consejo de Seguridad de que el compromiso de la comunidad internacional con Haití debía basarse en un nuevo modelo de cooperación, con los haitianos firmemente a la cabeza.

El Reino Unido acoge con beneplácito la finalización del Marco Estratégico Integrado de las Naciones Unidas, que apoya y sustenta las prioridades nacionales de Haití. Nos complace ver que el equipo de las Naciones Unidas en el país esté intensificando sus esfuerzos, y que instrumentos como el Fondo para la Consolidación de la Paz, que el Reino Unido respalda plenamente, se estén desplegando estratégicamente.

Al acercarnos a los debates sobre la prórroga del mandato, el Reino Unido sigue apoyando la labor de la BINUH. No obstante, es el compromiso político de todos los dirigentes lo que se necesita para superar las divisiones nacionales y brindar a Haití la oportunidad de romper los ciclos de inestabilidad e iniciar un nuevo capítulo.

Anexo XII

Declaración de la Representante Permanente de los Estados Unidos de América ante las Naciones Unidas, Kelly Craft

Me complace dar la bienvenida hoy al Ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, Álvarez Gil. Agradezco a Helen Meagher La Lime su exhaustiva actualización sobre la situación en Haití, tanto hoy como durante nuestra reunión del viernes con Sancho y Laura. También le agradezco la labor que ella y el equipo de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH) han realizado en apoyo de la estabilidad y la reforma en Haití. Los Estados Unidos —y yo personalmente— seguimos resueltos a trabajar en estrecha colaboración con todas las partes interesadas al servicio de un Haití seguro y próspero.

Durante mi conversación del sábado con el Presidente Moïse, los insté a él y al Gobierno de Haití a que celebren elecciones legislativas tan pronto como fuera técnicamente posible para restablecer el Parlamento de Haití. Los Estados Unidos siguen alentando al Gobierno de Haití a que adopte las medidas necesarias para organizar las elecciones legislativas, que deberían haberse celebrado hace tiempo, y salir del actual período de gobierno por decreto.

Si bien el anuncio del Gobierno haitiano sobre los miembros del Consejo Electoral Provisional fue un paso necesario en ese sentido, aún queda mucho por hacer, incluida la aprobación de una ley electoral, un presupuesto electoral y un calendario electoral. El pueblo de Haití merece la paz, la prosperidad y la estabilidad, que solo pueden lograrse mediante la asociación entre un Gobierno que responda ante sus ciudadanos y un poder legislativo que funcione.

Nos preocupa profundamente, al igual que al Presidente Moïse, que las bandas armadas sigan violando los derechos humanos de los residentes de comunidades vulnerables en todo Haití y que hayan desplazado a cientos de familias. Instamos al Gobierno de Haití a que proteja a sus ciudadanos más vulnerables mediante la aplicación de una estrategia integral contra las bandas, a fin de socavar el apoyo a estas y hacer que los autores de la violencia y sus cómplices rindan cuentas.

El sistema de justicia de Haití no ha adoptado ninguna medida concreta para enjuiciar a los autores de violaciones de los derechos humanos en los últimos meses, y la falta de rendición de cuentas de los perpetradores de violaciones de los derechos humanos refuerza el entorno de impunidad. El asesinato de Monferrier Dorval, el 28 de agosto, fue un ataque a la sociedad civil y a todos los que trabajan por un futuro mejor en Haití. Exhortamos al Gobierno de Haití a que investigue y enjuicie a los responsables, y seguiremos abogando por el fortalecimiento del estado de derecho en Haití.

Comuniqué al Presidente Moïse que los Estados Unidos siguen decididos a trabajar con la Policía Nacional de Haití para fortalecer su capacidad de desarticular las bandas armadas y la violencia y proporcionar seguridad a los ciudadanos. Recientemente reprogramamos 5 millones de dólares en asistencia para los esfuerzos contra las bandas y proporcionaremos asesores adicionales a la Policía Nacional de Haití para ayudar a abordar las preocupaciones sobre los derechos humanos y la conducta de la policía. Sin embargo, la Policía Nacional de Haití sigue enfrentándose a limitaciones presupuestarias y a crecientes presiones operacionales. Sin una financiación oportuna y suficiente y un compromiso a largo plazo del Gobierno de Haití, la Policía Nacional de Haití no podrá cumplir eficazmente su mandato en materia de seguridad pública.

Haití sigue enfrentando la amenaza de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), como todos nosotros. Sin embargo, como se señala en el informe del Secretario General (S/2020/944), el desempeño del Gobierno de Haití en la limitación

de los efectos de la crisis ha sido encomiable. Felicitamos al Gobierno de Moïse por la aplicación del Plan Nacional de Preparación y Respuesta a la COVID-19 y prometemos seguir ayudando al pueblo haitiano en la lucha contra esta pandemia. Hasta la fecha, los Estados Unidos han destinado más de 16 millones de dólares en asistencia combinada para apoyar los esfuerzos de Haití de lucha contra la COVID-19 y han transferido la propiedad de 37 respiradores al Gobierno de Haití para ayudar en sus esfuerzos.

Al acercarnos al fin del primer año de la BINUH, afirmamos el papel esencial de buenos oficios de la Representante Especial del Secretario General y la labor vital de la BINUH al servicio de la buena gobernanza y la reforma. También tomamos nota del aumento de la cooperación entre la BINUH y el equipo de las Naciones Unidas en el país durante este último año. Es esencial continuar estos esfuerzos coordinados, así como las distintas esferas de especialización y responsabilidades del equipo en el país, a fin de garantizar el apoyo más eficaz de las Naciones Unidas a Haití.

Hace apenas un año, me reuní con el Presidente Moïse y una muestra representativa de los líderes políticos y económicos de Haití para examinar el camino que se ha de seguir. Debo decir a los miembros del Consejo que el sábado me sentí cautelosamente optimista durante mi conversación. Para ser muy transparente, por si los miembros no lo saben, el padre del Presidente falleció el domingo. Debido a la muerte de su querido padre, las reuniones con los partidos de la oposición se retrasarán cuatro o cinco días.

Hace tiempo que las partes interesadas de Haití deberían haber resuelto su prolongado estancamiento político, creado instituciones sólidas y promulgado las reformas necesarias. Los Estados Unidos seguirán apoyando a Haití en sus esfuerzos por construir un futuro seguro y próspero. Una vez más, en estos momentos tenemos presente al Presidente Moïse en nuestros pensamientos y oraciones.

Anexo XIII

Declaración del Representante Permanente de Viet Nam ante las Naciones Unidas, Dang Dinh Quy

Quisiera dar las gracias al Secretario General por su informe (S/2020/944) sobre la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH), y a su Representante Especial, la Sra. Helen Meagher La Lime, por su perspicaz exposición informativa y su labor sobre el terreno en este momento tan difícil. También quisiera agradecer la presencia y la declaración del Ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana en nuestra reunión de hoy.

Nos preocupa que Haití siga enfrentando una extrema incertidumbre política, económica y social, que se ha visto exacerbada por la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19). La continua violencia, especialmente la delincuencia relacionada con las bandas, en algunas partes del país ha dado lugar a la inestabilidad existente. El estancamiento político y el calendario electoral no programado siguen siendo los mayores desafíos que obstaculizan las reformas constitucionales. En relación con los asuntos que hoy son objeto de examen, quisiera hacer hincapié en las tres cuestiones siguientes.

En primer lugar, en cuanto al progreso político, compartimos las preocupaciones sobre las dificultades señaladas en el informe del Secretario General, especialmente los efectos adversos de la pandemia de COVID-19. La incertidumbre y el estancamiento en el ámbito político son las principales causas de las múltiples dificultades y la inestabilidad en Haití, que perjudican los medios de vida del pueblo haitiano y el disfrute de sus derechos humanos. En este contexto, pedimos al Gobierno, a los partidos políticos y a otras partes interesadas en Haití que dejen de lado sus divergencias y entablen un diálogo constructivo. Ya es hora de que se llegue a una avenencia y a un consenso político sobre reformas constitucionales y más amplias. No hay otra manera de abordar las causas fundamentales de los problemas del país en aras de su estabilidad y desarrollo sostenidos.

En segundo lugar, en lo que respecta al proceso electoral, nos preocupa la falta de consenso sobre los aspectos clave de los preparativos de las elecciones, incluidos un marco electoral, un calendario y un Consejo Electoral Provisional que funcione plenamente. Al respecto, exhortamos a que se celebren elecciones oportunas y dignas de crédito, que sean aceptables para todas las partes interesadas haitianas en 2021. También instamos a todas las partes interesadas a que sigan esforzándose por entablar un diálogo inclusivo para alcanzar un acuerdo político sobre la nueva composición del Consejo Electoral Provisional y las modalidades y el calendario de las elecciones, incluida la representación política de las mujeres y los jóvenes. Exhortamos a las Naciones Unidas y a la comunidad internacional a que presten más asistencia técnica y adopten las medidas necesarias para proteger a los ciudadanos y los partidos políticos haitianos en el camino que queda por delante.

En tercer lugar, en cuanto a las amenazas de violencia, Haití sigue afrontando una serie de amenazas y desafíos de larga data. La violencia de las bandas supone un desafío cada vez mayor para la autoridad del Estado en partes del territorio de Haití. Los combates entre grupos de bandas que tienen como objetivo las comunidades locales han tenido repercusiones negativas en los medios de vida de los haitianos. Las mujeres, los niños y otros grupos vulnerables siguen corriendo el riesgo de ser víctimas de la violencia y continúan marginados en la vida política del país.

Condenamos esa violencia y esos ataques. Instamos al Gobierno de Haití y a las autoridades locales a que asuman sus responsabilidades, adopten medidas más decisivas para mejorar el marco jurídico del país y adopten todas las medidas de seguridad necesarias para poner fin a la violencia y proteger a los civiles, especialmente a las mujeres y los niños.

Para concluir, elogiamos la incesante labor y los incansables esfuerzos de la BINUH. Reiteramos nuestro apoyo a la prórroga de su mandato. Quisiéramos reafirmar nuestro apoyo al llamamiento del Secretario General para que se realicen cambios estructurales y a largo plazo en Haití, con el fin de encaminar al país hacia el desarrollo sostenible.
